

Contribución del FPD a la programación de la CE

Resumen de las contribuciones actuales de los miembros del FPD

I. Recomendaciones y cuestiones clave:

1. Tener en cuenta la COVID-19 en todas las prioridades y apoyar **procesos de transición incluyentes y justos** en el diseño de planes de recuperación. Las comunidades de aquellos lugares en los que el gobierno se ha involucrado en la lucha contra la COVID-19 han salido mejor paradas por lo que la participación de las autoridades locales será crucial para la recuperación. La participación de los beneficiarios es de vital importancia dado que uno de los efectos derivados de la COVID-19 es que las respuestas centralizadas de emergencia nacional no han incluido a todos los interesados, lo cual tiene un impacto en el logro de los objetivos de desarrollo. A este respecto, la mayoría de los participantes consideran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un marco relevante que incluye prioridades —principalmente la salud, la educación, la igualdad de género y la participación de los jóvenes— que se han mostrado fundamentales y transversales en todos los puntos tratados. Asimismo, se respaldó el Enfoque Territorial para el Desarrollo Local (TALD por sus siglas en inglés) como la manera de localizar las políticas nacionales y de reforzar el compromiso con la subsidiariedad implícito en la voluntad de la UE de establecer un mayor enfoque geográfico para su financiación. Los participantes también expresaron la necesidad de centrarse en la resiliencia social, económica e institucional para lograr una mejor reconstrucción.
2. Sin embargo, parece que existe una diferencia de **comprensión en materia de desarrollo** entre los donantes y los países socios. La actual clasificación para la AOD, que se centra en criterios basados en los ingresos, no recoge la naturaleza multifacética del desarrollo, de la misma manera que el enfoque de los donantes no siempre tiene en cuenta las necesidades más urgentes de los países socios. Mientras que los primeros proponen temas bastante «sofisticados» como la digitalización o los pactos verdes, los segundos siguen necesitando dinero para proporcionar servicios públicos básicos o para construir infraestructuras esenciales. Además, la mayoría de la ayuda al desarrollo sigue destinada a los gobiernos centrales, que no siempre tienen en cuenta a todos los interesados, por lo que la UE debe garantizar que la sociedad civil esté debidamente involucrada en la evaluación de las prioridades y en el seguimiento de su aplicación. De manera similar, la UE debe participar en consultas con las Autoridades Locales sobre programación a

través de un diálogo directo con las AL y de las asociaciones nacionales. A este respecto, el uso del FPD puede ser una manera de garantizar la inclusión a nivel nacional en paralelo con el programa a nivel global.

3. **Recuperación verde:** la biodiversidad, las leyes, el cambio climático, la salud humana y la salud de los ecosistemas están todos entrelazados. Es importante tener en cuenta la manera en que toda la programación está en consonancia con los principios de «no dañar» —evaluaciones ambientales y climáticas sólidas para garantizar que otras inversiones cuyo objetivo es distinto a estas prioridades no se causen daños—, especialmente en el contexto del FEDS+. Las islas del Pacífico plantearon necesidades específicas con respecto a la resiliencia ante el cambio climático y a la mitigación de las enfermedades y resaltaron su extrema vulnerabilidad como estados insulares. Integrar los beneficios medioambientales de la situación actual a la «nueva normalidad». En el debate de Asia y el Pacífico se hizo hincapié en el conflicto en materia del reciclaje mundial, en particular de los desechos plásticos. Esto es especialmente relevante ya que una de las propuestas para financiar la respuesta de la COVID-19 es la imposición sobre los plásticos.
4. Fomentar **el trabajo digno y la creación de empleo** como una estrategia de recuperación pos-COVID-19. Promover la salud y la seguridad laboral y medioambiental. Apoyar las inversiones a largo plazo en protección social y sanitaria. Respaldar la protección social universal como una prioridad mundial que la UE debe abordar, con la garantía de que sigue un enfoque basado en los derechos y que cubre a los trabajadores tanto formales como informales, estableciendo por lo tanto un mínimo de protección social que parece indispensable en el contexto actual de movilidad e incertidumbre laboral.
5. **Movilización de recursos.** Utilizar recursos nacionales para el desarrollo sostenible en consonancia con la Agenda de Acción de Adís Abeba. Utilizar la financiación del sector público para movilizar la del sector privado involucrando a los actores de la sociedad civil en aquellos esfuerzos que garanticen responsabilidad y transparencia, entre ellos, aclarar el significado del sector privado en la cooperación al desarrollo (y su impacto en otras formas de apoyo). Las pequeñas y medianas empresas (pymes) dependen de las capacidades de los intermediarios, por lo que es necesario impulsar estas capacidades para apoyar a estas empresas. Al desarrollar las economías locales, garantizar que los agentes económicos locales y a pequeña escala, incluyendo en el sector informal, son tomados en consideración en los enfoques de inversión.
6. **Digitalización** (quizás la prioridad en la que más se ha hecho hincapié hasta el momento; respuestas múltiples y apoyo firme) - digitalización y desarrollo de infraestructuras TIC asegurándose de que se establecen las estrategias adecuadas, en particular para el gobierno local. Ante la COVID-19, la digitalización figura en el centro de la futura normalidad junto con las medidas sanitarias y de higiene preventivas y medioambientales. La digitalización está estrechamente relacionada con el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones, por lo que está fuertemente vinculada a todas las prioridades de la UE, por lo cual es preciso establecer normas para la gobernanza de datos.

7. **Asociaciones de migración.** La migración y sus desafíos y oportunidades se plantearon como prioridades clave, sobre todo por parte de los miembros del FPD de África y de Asia y el Pacífico. La migración debe contemplarse como una oportunidad en lugar de como una amenaza y debe utilizarse para la elaboración de políticas innovadoras que involucren a las autoridades locales, las cuales juegan una función crucial que a menudo se subestima. En Asia se observó que la crisis de la COVID-19 ha provocado experiencias positivas —amnistías, regularizaciones, etc.— que podrían servir como modelo para la UE. Sin embargo, el retorno masivo de trabajadores en el extranjero ha dejado en evidencia la deficiente capacidad de absorción de muchos países. Por otro lado, se habló de las malas condiciones de vida y del creciente abuso de muchos migrantes en Asia y se hizo énfasis en el vínculo con el trabajo decente y la necesidad de los migrantes de poderse organizar. Aspectos como la migración interna, la intrarregional y la sur-sur forman parte del debate sobre la migración.
8. La UE debe fortalecer el vínculo entre comercio e inversión y las prioridades de desarrollo a la vez que abre sus **métodos de implementación** a la cooperación multi-actor, simplificando sus procedimientos (convocatorias de propuestas) con el fin de aligerar una carga administrativa que no tiene suficientemente en cuenta la diversidad de los actores de las OSC y sus capacidades. El enfoque de «política primero» es bienvenido, pero se debe garantizar que se involucra a otros actores aparte de los gobiernos centrales y que se promueve una combinación de políticas que aborde la complejidad y promueva la inclusión como medida para comprender mejor las realidades polifacéticas de los países en desarrollo. En esta línea, los Contratos Marco de Asociación (CMA) se consideran una buena práctica de alianzas multi-actor e incluso como una modalidad de implementación propiamente dicha. El apoyo presupuestario a las asociaciones de gobiernos locales aumenta sus capacidades para respaldar el compromiso de sus miembros mediante diálogos estratégicos con las DUE, en consonancia con las Hojas de Ruta UE-SC que se están adaptando a los gobiernos locales y están siendo testadas en algunos países pilotos.
9. Una financiación sin un respaldo adecuado ni una supervisión democrática no es sostenible. Por ello, es esencial fortalecer las capacidades de los actores locales para impulsar procesos de desarrollo nacional y **garantizar la participación a todos los niveles**, empezando en el comunitario a través del apoyo a las OSC locales y a los negocios centrados en las personas (cooperativas) que permiten una distribución más justa de los beneficios económicos entre grupos que a menudo se ven privados de sus derechos (mujeres, jóvenes, trabajadores informales, etc.). A nivel nacional, es igual de importante apoyar a las redes de la SC y organizaciones paraguas en el análisis de marcos legales y otras tareas relacionadas con las políticas públicas para que así puedan llevar a cabo un cabildeo adecuado y supervisar la acción del gobierno. Esto es especialmente importante habida cuenta de las maneras en que la crisis de la COVID-19 ha reforzado el retroceso democrático y la reducción del espacio cívico, unas tendencias preocupantes que se están viendo consolidadas por muchos gobiernos socios a través de la restricción de libertades disfrazada de medidas de salud pública.

10. Fortalecer los procesos democráticos y el Estado de Derecho, que están vinculados con todas las prioridades, pero en particular con la digitalización y el Pacto Verde, dado que las industrias extractivas a menudo se convierten en una amenaza para los derechos humanos y medioambientales. El rol de la sociedad civil se considera fundamental para llevar a cabo auditorías sociales, promover la igualdad de género, aumentar la transparencia y mejorar la gobernanza general en los países socios. Para ello, la UE debe centrarse en revertir el fenómeno de reducción del espacio cívico abriendo espacios para el diálogo y garantizando que los gobiernos socios involucren a las OSC y AL pertinentes en las acciones financiadas por la UE.

II. Aspectos de las prioridades de la UE especialmente relevantes para seguir adelante y «reconstruir mejor»

1. Pactos Verdes

Conscientes del impacto que la estrategia para la recuperación de la crisis de la Covid-19 puede tener sobre el Acuerdo de París, los miembros del FPD insisten en aprovechar las oportunidades medioambientales surgidas de la situación actual a través de los Pactos Verdes. Hacen hincapié en la importancia de una recuperación verde y en la promoción de una «nueva normalidad» que tenga en cuenta la reducción de la huella de carbono y de la contaminación provocada por la situación actual, así como la concienciación del público y de los tomadores de decisión. Alientan a usar los acuerdos internacionales para optimizar el cumplimiento del Acuerdo de París y ven la próxima COP26 en Glasgow como una oportunidad para localizar el programa sobre el clima, señalando que las prioridades de adaptación deben ser una parte crucial de la programación geográfica.

La situación actual y su impacto en una creciente inseguridad alimentaria han dejado en evidencia los efectos negativos de la dependencia en mercados mundiales y, en consecuencia, la importancia de la proximidad en los modelos de producción. Los miembros del FPD han subrayado la necesidad de volver a localizar los sistemas alimentarios y de comer lo que producimos primero. En esta misma línea, perciben el Pacto Verde como una oportunidad para satisfacer las necesidades de la comunidad y fomentar modelos innovadores para la producción alimentaria como la agricultura urbana.

La configuración regional de los debates sacó a relucir algunos desafíos y oportunidades específicos de cada una de las regiones. En América Latina, por ejemplo, los Pactos Verdes deben vincularse con la paz y la seguridad dado que muchos defensores de los derechos humanos —que consideran que los derechos de la propia Naturaleza son inherentes a los humanos— están siendo acosados por las industrias extractivas. En el caso de África, la emergencia de cooperativas de energía renovable permite a los ciudadanos convertirse en dueños de la producción y el consumo de su propia energía de un modo sostenible que la UE debería incentivar a través de su apoyo. En cuanto a Asia, los Pactos Verdes están conectados con el trabajo digno a causa del problema de los espacios de trabajo poco seguros en grandes industrias y de sus vínculos con el medio ambiente, por lo que es necesario centrar esfuerzos en la Salud Laboral y Medioambiental. También se hizo hincapié en los deshechos

plásticos y las posibles tensiones que pueden surgir entre las economías emergentes y las desarrolladas, así como en otros aspectos de estos deshechos como su mala gestión, el peligro para la vida marina y el aumento de su exportación al Sudeste Asiático.

2. Tecnologías digitales y de datos

Los miembros del FPD conceden mucha importancia a los debates acerca de digitalización, que en todas las regiones han surgido como una prioridad durante la pandemia. Ha quedado claro que todos los ciudadanos necesitan gozar de un acceso a Internet abierto, libre y seguro para poder garantizar una transición justa hacia una economía digital. Sin embargo, si no se supervisa, la digitalización puede agravar las desigualdades y amenazar los derechos humanos universales y las libertades fundamentales. Por consiguiente, la UE debe garantizar que las transformaciones digitales sean incluyentes y respetuosas con los derechos, especialmente con aquellos relacionados con la protección de datos. Sobre este aspecto, la experiencia de las Autoridades de Protección de Datos, como el Supervisor Europeo de Protección de Datos, pueden ser muy útiles para muchos países socios cuando se trata de garantizar que sus propias normas reguladoras son respetuosas con los derechos de los ciudadanos en materia de privacidad y de acceso a la información.

Esta «digitalización centrada en las personas» está en consonancia con el ODS 8.2 («lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación») y por lo tanto se debe promover a través de los programas de cooperación para el desarrollo de la UE que deben fomentar marcos regulatorios para la digitalización para poder garantizar un enfoque de la tecnología «centrado en las personas». Por supuesto que es importante suministrar tecnología a los países socios para concederles libertad de información, pero aparte de las inversiones en infraestructuras tecnológicas, la digitalización también abarca la democratización de los datos, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones.

Se hizo hincapié en la inclusión de mujeres y niñas, jóvenes, niños y zonas rurales por tratarse de un aspecto crucial para fomentar competencias digitales incluyentes y la creación de capacidades para todas las personas con el fin de contrarrestar la creciente división digital que ya está afectando a los niños, a menudo excluidos de las plataformas de aprendizaje en línea. Las autoridades locales también señalaron la necesidad de establecer una gobernanza de datos basada en estándares y de unas estrategias adecuadas, e hicieron hincapié en un enfoque territorial para el desarrollo local (ETDL).

En general, es crucial personalizar la agenda digital según el contexto de cada país socio y evitar las soluciones predefinidas al colocar la digitalización en el centro de las agendas de industrialización y comercio y garantizar que se aborden las desigualdades en términos de acceso, incluyendo las zonas rurales. En este marco, la cooperación de la UE puede ayudar en el acompañamiento de las transiciones tecnológicas orientadas a ampliar el acceso universal a la protección social y a fomentar la adquisición de habilidades para que todos los trabajadores se adapten a los cambios tecnológicos. Esto se puede llevar a cabo a través del apoyo a

plataformas/conectores digitales (hubs) existentes que ya trabajan en la democratización de datos, en la redistribución de la riqueza y en garantizar la protección social de los trabajadores en la plataforma económica. Otra opción es apoyar a mujeres y niñas y fomentar un ambiente propicio que respalde a los jóvenes y a los emprendedores.

3. Alianzas para un Crecimiento y Empleos Sostenibles (Desigualdades/Economía al servicio de los ciudadanos)

Los miembros del FPD han puesto de manifiesto durante mucho tiempo las limitaciones de medir el crecimiento solamente a través de criterios económicos como el PNB y han defendido un crecimiento y empleos sostenibles en una economía que esté al servicio de los ciudadanos de acuerdo con lo que se ha convertido en una de las prioridades principales de la UE. Sin embargo, los efectos mundiales de la actual crisis sanitaria (con confinamientos, una tasa de desempleo en aumento, una creciente crisis de recursos, flujos de remesas ralentizados y una paralización del comercio, por mencionar solo algunas implicaciones) han agravado las desigualdades existentes y amenazan con profundizarlas aún más.

Por ello se hace un llamamiento a la UE para que apoye tanto al sector público como al privado. La importancia de los servicios públicos, en las primeras líneas de respuesta, ha quedado en evidencia en la crisis, así como la función del sector público en la supervisión del sector privado. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la economía local es esencial para la recuperación de la economía mundial, la UE debe centrar su apoyo en la promoción de modelos de negocio sostenibles e incluyentes mediante inversiones que desarrollen el potencial de pequeñas y medianas empresas (pymes) que a su vez creen empleos para la gran mayoría de la población, cosa que solo se puede hacer si se dispone de un entorno favorable y de medidas de apoyo (por ejemplo, acceso a créditos). De esta manera, la UE puede apoyar a las pymes en la creación de empleos formales y sostenibles, en particular en regiones como América Latina donde aproximadamente un 60 % de los trabajadores se encuentra en el sector informal y sin protección social. Algunos miembros señalaron el modelo cooperativo como un mecanismo para capacitar a mujeres y jóvenes y para introducir a los trabajadores informales en el sector formal (como por ejemplo en la OIT en Senegal en materia del sector de gestión de residuos). La UE debe fomentar la cancelación de la deuda, garantías para inversiones y un viraje hacia la protección social universal, algo que todas las regiones están solicitando.

En lo que respecta a los derechos y a la seguridad de los trabajadores, los miembros del FPD instan a la UE a que fomente mecanismos de diálogo social que garanticen la participación y establezcan directrices para asegurar la libertad de asociación de los sindicatos obreros, reconociendo así la importancia de la negociación colectiva a nivel empresarial. Subrayan, asimismo, la salud laboral y medioambiental como un punto clave.

4. Asociaciones de migración

Los debates del FPD acerca de la migración estuvieron estrechamente relacionados con el empleo y el trabajo digno y se basaron en la situación actual, que ha puesto a prueba la capacidad de reabsorción de muchos países con gran cantidad de migrantes retornados que no encuentran trabajo en mercados laborales ya de por sí saturados y multitud de lugares de trabajo que han cerrado, tal como se ha comentado en los puntos centrales anteriores. En Asia, por ejemplo, hay trabajadores migrantes que tienen las competencias que los empleadores necesitan, pero a causa de la Covid-19 se han cerrado las fronteras y se ha impedido que estos trabajadores puedan llegar a su lugar de trabajo, independientemente del nivel competencial. Para que los negocios funcionen de manera eficaz, la recuperación económica debe centrarse tanto en la productividad como en la sostenibilidad, luchando contra la informalidad y centrándose en las competencias para proporcionar empleos.

Los miembros del FPD también subrayan la importancia de permitir que los trabajadores migrantes se organicen y de apoyarlos y señalan que la situación de estos trabajadores está empeorando, sobre todo en Asia, donde se han producido detenciones arbitrarias y un aumento en los abusos. Muchos trabajadores de la industria textil en el Sudeste Asiático, por ejemplo, se trasladaron desde zonas rurales y están viviendo en muy malas condiciones, envían todo su dinero a sus familias y no tienen acceso a los servicios sociales. Por otro lado, también se señalaron algunas reacciones positivas a la crisis de la Covid-19 como regularizaciones masivas y amnistías que representan las mejores prácticas en la gestión de la migración y podrían servir de inspiración para las políticas migratorias de la UE. En este sentido, los miembros alientan una visión más positiva de la migración —más como una oportunidad que como una amenaza— y sugieren trabajar con la diáspora para abordar las causas primordiales y gestionar la migración. Las comunidades locales cercanas a los migrantes, como los gobiernos locales y las cooperativas, deben involucrarse más en las políticas migratorias.

5. Gobernanza, Paz y Seguridad

Con el fin de defender los derechos fundamentales y promover la gobernanza, la paz y la seguridad en todo el mundo, la política de desarrollo de la UE debe trabajar para que las instituciones funcionen. Miembros de América Latina y el Caribe subrayaron la necesidad urgente de fortalecer las democracias en el clima actual de las «fake news» (noticias falsas) y de la renovación de gobiernos autoritarios en la región. Hicieron hincapié en la necesidad de contrarrestar la influencia política de las redes de narcotráfico y de las grandes empresas para defender una democracia que funcione en la que los líderes electos rindan cuentas a los ciudadanos y no a los intereses personales de poderosos actores. Para conseguirlo, es importante tener en cuenta las nuevas formas populares de representación y la sociedad civil debe comprometerse a todos los niveles —local, regional y nacional—, en los que debe haber una mejor coordinación para evitar el solapamiento y se debe garantizar la participación ciudadana al nivel más apropiado. En algunos casos, la debilidad democrática ha resultado en la criminalización

de las OSC dado que se perciben como una amenaza para el gobierno y otros actores que tratan de socavar su credibilidad y legitimidad. Por lo tanto, la promoción de un entorno favorable para la sociedad civil resulta un aspecto transversal para todas las prioridades de la UE, tal como queda ilustrado en la situación de América Central en la que la protección de los defensores de los derechos humanos no solamente está relacionada con la paz y la seguridad sino también con el Pacto Verde, dado que la mayor amenaza tanto para la democracia como para el medio ambiente reside en los proyectos extractivos.

La buena gobernanza depende de la coordinación adecuada entre lo nacional y lo local. En este sentido, la descentralización respalda mejores respuestas locales, en particular con respecto a la Covid-19, ya que los gobiernos locales pueden proporcionar mejores respuestas e implementar las medidas necesarias por su calidad de haber sido elegidos y de estar más cercanos a la comunidad que los gobiernos nacionales. Sin embargo, los procesos de descentralización se suelen estancar y privan a los gobiernos locales de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones y sus competencias. En este contexto, los miembros del FPD perciben como esencial la adopción sistemática de un enfoque multi-actor en el desarrollo local, en el marco del enfoque territorial para el desarrollo local (ETDL), en un momento en el que la financiación para el desarrollo local se debe gestionar a nivel nacional. Como resultado, las Delegaciones de la UE precisan de directrices claras para integrar las prioridades acordadas en sus Programas Indicativos Plurianuales (PIP), teniendo en cuenta que el apoyo a las Autoridades Locales ya no quedará cubierto por los programas temáticos sino por los mecanismos de apoyo nacional.

III. Función de las alianzas multi-actor en la lucha contra las desigualdades y la promoción de las prioridades de la UE

1. PROCESO

Existen varios procesos que dependen de (o se podrían beneficiar de) un mayor compromiso multi-actor, ya que como señalan los miembros del FPD el desarrollo no es sostenible si todos los actores no se involucran de manera más amplia. Con el fin de que «nadie se quede atrás», todos los actores deben sentarse a debatir, por lo que la ayuda al desarrollo debe incluir otros criterios como el apoyo a la democracia local; alcance, apropiación e inclusión. La UE debe garantizar la institucionalización de un diálogo multi-actor incluyente a todos los niveles mediante el uso de mecanismos europeos existentes como las Hojas de Ruta de las Delegaciones de la UE para el compromiso con la Sociedad Civil, los diálogos políticos en curso sobre la reforma del sector y el Foro Político sobre el Desarrollo. Se hicieron sugerencias para incluir los CMA en los debates sobre las hojas de ruta y para replicar el modelo del FPD a nivel nacional e incluso a nivel del gobierno local. Los participantes reclamaron una mayor atención a la programación conjunta y al monitoreo.

Los Convenios Marco de Asociación (CMA) se señalaron como mejores prácticas de las AMA. Sus fortalezas son: responder a las necesidades específicas de la organización (a diferencia de los proyectos que cubren «solamente»

un aspecto); complementariedad con los programas nacionales; reconocimiento conjunto para lograr objetivos comunes; flexibilidad en la implementación; adaptabilidad al contexto mundial y regional; extensión a un gran número de OSC y AL en distintos países; facilitación del flujo de conocimientos en ambas direcciones (ascendente y descendente); y el gran abanico de actividades, desde la investigación al cabildeo, la creación de capacidades, la organización de eventos y seminarios, visibilidad y asociaciones.

Los gobiernos nacionales (y su voluntad de implicar a otros interesados) son fundamentales y la responsabilidad nacional de distintos procesos es esencial, así como la capacidad de gobiernos nacionales de establecer asociaciones. Con respecto a las limitaciones que hay que tener en cuenta, los participantes recomendaron una menor cofinanciación y afrontar la incertidumbre relativa a la continuidad del financiamiento (posible brecha temporal). Los miembros de América Latina debatieron acerca de la necesidad de abrir espacios sectoriales para prepararse para el diálogo y garantizar la igualdad de condiciones de todos los participantes.

2. IMPLEMENTACIÓN

Distintas modalidades de implementación tienen el potencial de incluir –o de incluir mejor– a múltiples socios de desarrollo. Es importante reforzar las herramientas y los instrumentos para evaluar el impacto social, económico y ambiental de las distintas modalidades de implementación. Concretamente, en América Latina se precisa de sistemas de monitoreo y de alerta temprana para las violaciones de los derechos humanos en el terreno, y es que algunos participantes han señalado que la colusión entre los gobiernos y las grandes empresas han provocado el estancamiento de la democracia.

Tal como se ha mencionado anteriormente, los Convenios Marco de Asociación y el FPD se pueden usar a nivel nacional y en conjunto con otras modalidades de implementación para promover sinergias desde una perspectiva transversal. En cuanto al Apoyo Presupuestario, los participantes señalaron que debe ser transparente y orientado hacia los actores, incorporando mecanismos de responsabilidad social. Uno de los logros subrayados en la revisión de la línea presupuestaria de las AL consiste en el apoyo a las asociaciones de gobiernos locales para que implementen sus propios planes estratégicos y así respondan a sus propias prioridades en lugar de a convocatorias de propuestas basadas en prioridades externas. Esto refuerza la capacidad dentro de las redes existentes y organizaciones nacionales y les permite seguir apoyando sus propias capacidades para entablar diálogos con las DEU según sus prioridades estratégicas.

En general, los miembros prefieren proyectos basados en subvenciones y solicitan a la UE que siga llevando a cabo convocatorias de propuestas, que parecen haberse reducido en América Latina en los últimos tiempos. La Asistencia Técnica debe contener una visión a largo plazo y se debe basar en las políticas públicas con un consenso claro. En la elaboración propuesta de una hoja de ruta para las AL, se apoyó el posible uso del hermanamiento como un mecanismo de respaldo a la cooperación descentralizada.

3. FINANCIACIÓN

Los miembros retaron a los tomadores de decisión a que definían en una primera instancia a qué se refieren con el término financiación «innovadora» y señalaron que la financiación sin apoyo adecuado y democracia no es sostenible. En cuanto al aumento de la financiación combinada ("blending" en inglés) y de las garantías, los miembros piden cautela dado que este giro radical en las modalidades de implementación no se apoya en una evidencia proporcional sobre su impacto. Se precisa una movilización de recursos internos para prestar servicios públicos y la correspondiente necesidad de reforzar la capacidad institucional a nivel local, lo cual refleja el respaldo mencionado anteriormente a los procesos de descentralización y de apropiación local. Se señaló que las AMA deben ser creativas a la hora de buscar nuevos modelos financieros (como fondos rotatorios, "crowd-funding", bonos verdes) y distanciarse de las modalidades tradicionales dominadas por una sola fuente.